

3.3.5. Finalmente, en el ámbito municipal, la Municipalidad de la Ciudad de Córdoba dictó en el año 1998 la Ordenanza 9847 sobre EIA, la cual también contiene un listado de proyectos sujetos a EIA, y contempla además el aviso de proyecto.

3.3.6. Como se advierte, las normas locales en materia de EIA son anteriores a la Ley 25.675, y han sido modificadas (en particular sus anexos) en diversas oportunidades, incluso con posterioridad a la vigencia de la Ley 25.675. Como se ha señalado, las normas provinciales se mantienen plenamente vigentes, y son las que determinan qué proyectos están sujetos a efectuar estudios de EIA, cuáles deben presentar aviso de proyecto, y en qué casos procede la audiencia pública y, como se advierte, no contradicen en modo alguno las disposiciones sobre EIA de la Ley Nacional 25.675.

3.4. Las habilitaciones de PORTA Hnos. SA.

3.4.1. La empresa inició el expediente en el año 1999, presentando Aviso de Proyecto para la **Fabricación de Alcoholes, Vinagres y Licores**. En ese entonces se encontraba vigente la Ley 7343 y el Decreto 3290/90, que no incluían dentro del Anexo I esta actividad. Ello así, con fecha **28 de marzo 2000** la Agencia Córdoba Ambiente Sociedad del Estado autorizó el Aviso del Proyecto en cuestión, dictando la Resolución N° 38/00.

3.4.2. Posteriormente, en el año 2010, la empresa decidió ampliar su Planta industrial. En esa fecha se encontraban vigentes en el ámbito provincial la Ley 7343 y el Decreto 2131/00. El ítem “Destilación de Alcoholes” se encontraba listado en el Anexo II del Decreto 2131/00 por lo que se encontraba sujeta a la presentación de Aviso de Proyecto. Asimismo, el art. 9 del referido Decreto permitía “efectuar la

**SE NOTIFICA, MANTIENE OPOSICION, MANIFIESTA, FORMULA
ACLARACIONES**

Señor Juez Federal:

Oscar Julián Valtier, por la representación de “**PORTA HNOS S.A.**”, en estos autos “**CRUZ, SILVIA MARCELA Y OTROS c/ MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA DE LA NACIÓN s/AMPARO AMBIENTAL**” (Expte. N° 21076/2016), ratificando el domicilio en 23-07679211-9, ante V.S. comparezco y digo:

I. OBJETO:

Que tal como surge de sus recientes presentaciones (08.09.2017), la parte actora, más que contestar un traslado, ha realizado una suerte de dúplica –por cierto, instituto vedado por nuestro ordenamiento procesal-, mediante la cual, en un claro desconocimiento de la materia ambiental, lo único que lograr es llevar a confusión a V.S. y a las partes involucradas en este proceso.

Por tal motivo, venimos por el presente a efectuar una serie de manifestaciones, con el sólo y exclusivo objeto de aclarar el “embrollo” en el cual nos pretende sumergir la accionante.

A tal fin se analizará el marco legal aplicable al caso que nos ocupa, como asimismo, desmentir la catarata de acusaciones y/o imputaciones infames, que en modo alguno se condicen con la realidad legal, y menos aún, con lo acontecido.

**II. MANTIENE OPOSICIÓN. EXISTENCIA DE DESVIACIÓN DEL
PROCESO:**

2.1. Sin perjuicio de las consideraciones que serán vertidas en esta presentación, señalamos que esta parte lo hace al sólo efecto de aclarar las tergiversaciones en que los actores incurren, y sin perjuicio de continuar manteniendo la oposición respecto a la modalidad que V.S. le ha impuesto a este amparo, ya que ha transformado el mismo en un juicio ordinario con un objeto diferente al fijado por las partes al trabar la litis.

En efecto, desde que V.S. decidió hacer de este proceso una cuestión pública e informativa (violando todos y cada uno de los principios procesales establecidos por la Ley de Amparo N° 16.986 y el Código Procesal Civil y Comercial), venimos a ratificar y mantener nuestra oposición con toda aquella prueba que haya sido incorporada y/u ofrecida con posterioridad a la traba de la litis de este proceso. Debe entenderse que también nos oponemos a la incorporación de las nuevas pretensiones que formula la actora, respecto de las cuales mi parte no ha tenido la oportunidad procesal de defenderse ni ofrecer pruebas.

Recordamos a V.S. que a la fecha de esta presentación existen pendientes de resolución un Recurso Extraordinario, por los mismos motivos en que se funda esta oposición.

2.2. No cabe duda que V.S. ha contribuido a desnaturalizar el proceso que debió guiar este reclamo, transformando una acción de amparo cuyo objeto original fue constatar si mi representada cuenta con las habilitaciones pertinentes para desarrollar su actividad, a un juicio ordinario cuyo objeto es determinar si la actividad de mi mandante es o no contaminante.

Adicionalmente, se han transformado las audiencias de conciliación en “públicas” e “informativas”, se ha permitido -una vez cerrada la instancia con las contestaciones de demanda- la incorporación de nuevos documentos y el ofrecimiento de nuevos medios de prueba, en una franca violación al art. 364 del

Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, al principio de preclusión procesal y del debido proceso, poniendo a las demandadas en un total estado de indefensión.

2.3. Es claro y no admite duda en contra, que una vez trabada la litis, la única prueba a producirse es la que ofrecieron las partes en la demanda y sus contestaciones, dado que éstas últimas fueron estructuradas en función del reclamo contenido en la demanda y la prueba ofrecida en la misma.

Al permitir que se autorice la incorporación de nuevos documentos y/o nuevos medios de prueba originalmente no ofrecidos, V.S. continúa violando la garantía de defensa en juicio, dado que de ese modo permite la incorporación de nuevos documentos y/o hechos que jamás pudieron tenerse en cuenta al contestar la demanda y que, además, pueden perjudicar todo el andamiaje jurídico construido tenido hasta ese momento en miras, dado que el mismo fue pensado en función de la demanda.

Ello produce un gravísimo agravio a la parte demandada como consecuencia del cambio en las circunstancias que se tuvieron en miras al momento de planificar la defensa y el ofrecimiento de la prueba correspondiente, motivo por cual el Código Procesal lo prohíbe expresamente.

2.4. Esta “mutación permanente del objeto” que V.S. ha consentido, deja a una de las partes –en el caso que nos ocupa, a las demandadas- en un total y absoluto estado de indefensión, desde que nunca pudieron defenderse de algo que jamás pudieron tener en cuenta al contestar la demanda o presentar su informe.

Piénsese tan solo en el caso opuesto; esto es, si las demandadas, a medida que no les va gustando el resultado del proceso, fueran incorporando nueva documentación y/o realizando nuevos ofrecimientos de prueba con posterioridad a la traba de la litis. Tal situación importaría por cierto un serio dislate, y además, el proceso nunca podría cerrarse, habida cuenta de estar las partes habilitadas a ofrecer nuevas pruebas y documentos *sine die*.

2.5. Es por tal motivo que esta parte mantiene su formal oposición con la producción de la prueba ordenada en este expediente, en tanto y en cuanto no sea la ofrecida por las partes en la demanda y/o en la contestaciones de demanda.

2.6. Del mismo modo, se reitera el pedido de desglose de los escritos que hayan acompañado documentación en forma extemporánea (esto es, con posterioridad a la traba de la litis), junto con la documentación acompañada a los mismos y/o que hayan planteado hechos nuevos, ajenos a la demanda y/o a la contestación, por ser también y contener, manifestaciones claramente extemporáneas.

III. EN SUBSIDIO MANIFIESTA:

3.1. Sentado lo expuesto en el capítulo precedente, procederemos ahora a efectuar una serie de manifestaciones y aclaraciones respecto a la confusión en que pretenden hacernos caer los actores.

3.2. El marco legal Nacional, Provincial y Municipal aplicable en materia de EIA.

3.2.1. Como ya lo hemos expuesto al contestar la presente demanda, en el ámbito nacional la evaluación de impacto ambiental fue regulada históricamente por las Provincias en sus jurisdicciones, ya que antes de la reforma constitucional de 1994, la materia “ambiental” era una materia “no delegada”. Ello así, la Nación carecía de potestades para dictar normas ambientales aplicables a todo el país. Por ello, en materia de EIA, la gran mayoría de las Provincias argentinas dictaron sus propias normas.

3.2.2. Con posterioridad a la reforma constitucional, y conforme lo habilita el tercer párrafo del art. 41, la Nación quedó facultada para dictar normas ambientales fijando presupuestos mínimos de protección ambiental aplicables a todo el país (delegación acotada por parte de las Provincias). Así, en el **año 2002** el Congreso de la Nación dictó la Ley 25.675, Ley General del Ambiente.

Esta norma, en materia evaluación de impacto ambiental, impone la obligatoriedad de llevar a cabo la misma con carácter previo a toda obra o actividad susceptible de degradar el ambiente “**en forma significativa**”. En efecto el art.11 de la ley establece que ...”*Toda obra o actividad que, en el territorio de la Nación, sea susceptible de degradar el ambiente ... en forma significativa, estará sujeta a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental, previo a su ejecución*”.

3.2.3. Queda claro, entonces, que la exigencia “común” a todo el país establecida por la ley nacional, es que estén sujetos a EIA y a consulta o audiencia pública, los proyectos susceptibles de degradar el ambiente “**en forma significativa**”.

3.2.4. Ahora bien, quién determina qué proyectos encuadran en dicha exigencia?. La Ley 25.675 lo dice claramente en su art. 12. ...”*Las autoridades competentes determinarán* la presentación de un estudio de impacto ambiental, cuyos requerimientos estarán detallados en ley particular y, en consecuencia, deberán realizar una evaluación de impacto ambiental y emitir una declaración de impacto ambiental en la que se manifieste la aprobación o rechazo de los estudios presentados”. Tenemos entonces que las Provincias son la autoridad de aplicación de la Ley 25.675, en sus respectivos territorios.

3.2.5. Así las cosas, la Ley 25.675 es precisamente una ley general y de presupuestos mínimos, que no contiene un listado ni ningún tipo de detalle sobre

qué proyectos concretos deben ser sometidos a EIA. Por ello, los elementos concretos que componen el instituto de la EIA, es decir, qué proyectos quedan alcanzados, qué criterios o listados se deben utilizar para determinar qué proyectos deben presentar estudio de impacto y cuáles no, qué exigencias procedimentales resultan aplicables, en qué casos se exige o no audiencia pública, etc., surgen de las normas aplicables en cada jurisdicción local.

De hecho prácticamente todas las Provincias argentinas cuentan con su propia ley de evaluación de impacto ambiental. La propia Ley 25.675 en su art. 3 dispone que la normativa ambiental preexistente, “*mantendrá su vigencia en cuanto no se oponga a los principios y disposiciones contenidas en ésta*”.

3.2.6. Por ello, en principio, el cumplimiento de la normativa provincial sobre EIA, implica cumplir con la Ley 25.675.

3.3. Normas de la Provincia de Córdoba:

3.3.1. En el ámbito de la Provincia de Córdoba, y desde una fecha muy anterior a la Ley Nacional General del Ambiente (2002), está vigente desde el año 1985 la Ley Provincial 7343, que establece los principios rectores para la preservación, conservación, defensa y mejoramiento del ambiente.

Esta ley que regula el instituto del impacto ambiental, en sus artículos 49 y siguientes, fue oportunamente reglamentada mediante el Decreto 3290/90.

3.3.2. Este Decreto estableció en el Anexo I los proyectos sujetos obligatoriamente a la Evaluación de Impacto Ambiental y, en el Anexo II, los proyectos obligatoriamente sujetos a presentación de aviso de proyecto y, condicionalmente, sujetos a la presentación de un estudio de Impacto Ambiental.

En este último caso, el Consejo Provincial del Ambiente es el que debía decidir con criterio técnico fundado, con la información del “Aviso de Proyecto”. De hecho, como se explicó al contestar la demanda, la habilitación ambiental inicial de la Planta de Porta fue otorgada en marzo de 2000, en los términos de la Ley 7343 y el Decreto 3290/90).

3.3.3. Posteriormente, en el año 2000 el Decreto 3290/90 fue **modificado y adecuado por el Decreto 2131/00** (B.O. 20/12/2000), modificándose el contenido de los Anexos I y II, entre otros aspectos. Este Decreto es claro al establecer que los emprendimientos mencionados en los Anexos I y II del Decreto 2131/00 deben obligatoriamente presentar un aviso de proyecto completando el formulario del Anexo III del mismo Decreto, antes de su puesta en funcionamiento. Las presentaciones deben hacerse ante la Agencia Córdoba Sociedad del Estado o ante el Municipio correspondiente. Solo los proyectos incluidos en el listado del Anexo I del Decreto 2131/00 deben obligatoriamente presentar un estudio de impacto ambiental para la obtención de su licencia ambiental.

3.3.4. Posteriormente, en el año 2014, la Provincia de Córdoba sancionó la Ley de Política Ambiental Provincial. Se trata de la Ley 10.208 que, en materia de EIA, mantuvo las dos categorías de proyectos: los sujetos obligatoriamente a EIA, y los sujetos a presentación de aviso de proyecto y, condicionalmente, sujetos a presentación de un EIA pero, **nuevamente, modificó el contenido de los Anexos I y II antes mencionados**, y reguló detalladamente el instituto. En materia de participación ciudadana, la Ley 10.208 dispone que la autoridad de aplicación debe determinar el mecanismo de participación ciudadana aplicable “conforme el nivel de complejidad ambiental del proyecto” (art. 28) pero, al mismo tiempo, establece como obligatoria la audiencia pública para proyectos obligatoriamente sujetos a EIA, es decir, los listados en el Anexo I.

con el objeto de suplir el déficit energético que tiene el país. De allí que nada pueda objetarse a Porta Hnos. S.A. tampoco desde este punto de vista. Y menos aún, relacionarlo con esta acción de amparo.

3.6.4. Y con relación a la cuestión derivada del cumplimiento del Estudio del Impacto Ambiental (EIA), que la actora critica, no hace sino demostrar que Porta cumple con todas las reglamentaciones y obligaciones legales existentes en materia ambiental. Más que criticarla, los actores debieran celebrar dicha conducta.

3.6.5. Ya hemos explicado más arriba, la historia legislativa y el cumplimiento por parte de Porta Hnos. de las obligaciones ambientales con relación a su planta de la Ciudad de Córdoba. Por ello, pretender trasladar los requisitos de las plantas llave en mano a la situación de la referida planta, resulta una absoluta falacia. De allí que cualquier análisis que se haga entre una y otra situación, resulta absolutamente atemporal e improcedente.

3.6.6. La actora señala en su libelo que la actividad de la planta no es inocua (página 20). Cabe señalar que las pericias realizadas en sede judicial, como consecuencia de las denuncias criminales realizadas por los actores, por más que no resulten de su gusto, han arrojado como resultado, precisamente, eso: **que son inocuas.**

3.6.7. De allí que las manifestaciones efectuadas por los actores con relación a mi representada, como hemos visto, tienen un efecto absolutamente contrario al buscado. En efecto, se ha demostrado que Porta Hnos. S.A., en sus actividades relacionadas con el bioetanol para combustibles, realiza su actividad dando cumplimiento a toda la normativa ambiental y a considerable distancia de la Ciudad de Córdoba, lo que no puede, por tal motivo, ser objeto del presente amparo. Del

mismo modo, las pericias realizadas en sede penal han arrojado que la planta sita en la Ciudad de Córdoba, **no contamina**.

3.7. Sobre la fundamentación del Decreto del 29.08.2017:

3.7.1. Finalmente, en el escrito intitulado “COMPARECE – MANIFIESTA – PLANTEA DISIDENCIA …”, la actora se queja de lo ordenado por V.S. en el Decreto del 29.08.2017. En dicha presentación, la actora plantea su “disidencia” con la fundamentación que V.S. ha asignado a su Decreto de fecha 18.8.2017, y solicita que se complemente la fundamentación legal adicionando la Ley General del Ambiente 25.675 (arts. 3,5, 8 inc.2, 11,12,13,19,20 y 21).

3.7.2. Como seguidamente se expondrá, la presentación de la actora resulta improcedente, y de acceder V.S. a lo que allí se peticiona, solo puede aportar confusión a quienes deben responder a tales requerimientos. Cabe señalar que V.S. en el referido decreto, requiere a las autoridades provinciales y municipales que informen “*las actuaciones relativas a Aviso de Proyecto y/o Evaluación de impacto ambiental, en relación a la Ley 10.208 ..., o lo que correspondiere*”.

3.7.3. Como se ha explicado, la radicación de Porta Hnos como su ampliación fueron aprobadas con anterioridad a la vigencia de la Ley 10.208, por lo que esta norma no resultó aplicable a las mismas. Esta circunstancia bastaría para desestimar el pedido de los actores.

3.7.4. Ahora bien, la Ley 25.675 no incluye listado alguno de proyectos sujetos a aviso de proyecto, ni a EIA, por lo que la pretensión de la actora de que V.S. agregue en su fundamentación de lo resuelto en su Decreto del 29.08.2017 la referencia a dicha Ley, solo puede aportar –una vez más- confusión a quienes deben

*presentación/tramitación correspondiente ante la Agencia Córdoba Ambiente y/o Municipio con jurisdicción en el área de desarrollo del proyecto". Porta Hnos. SA., presentó el Aviso de Proyecto ante la Municipalidad de la Ciudad de Córdoba (Expediente n° 30-15-001-093-A), denunciando la ampliación de la planta. El **6 de diciembre de 2010**, la Municipalidad de Córdoba aprobó el Aviso del Proyecto del emprendimiento en cuestión bajo la Resolución D.I.A. N° 975/10.*

Por ello, el punto 44 inc. j) del Anexo I de la Ley 10.208 no resulta aplicable a la radicación de PORTA Hnos, ni a su ampliación, por ser dicha Ley de fecha posterior a dichos proyectos.

3.5. Sobre las manifestaciones del Estado Nacional:

3.5.1. En el escrito al que nos referimos, el representante de los accionantes se dedica a cuestionar y denostar, las expresiones vertidas por la representante de la Secretaría de Energía (Estado Nacional), por no tener otra manera de contrarrestar la verdad que surgen de tales manifestaciones. Indudablemente, la representante de dicha repartición tiene toda la razón.

No obstante ello, como sus conclusiones no resultan del agrado de los accionantes, el camino elegido por éstos no es la razón sino la mera descalificación.

3.5.2. En primer término, expresa la representante del Estado Nacional que Porta Hnos. S.A. no produce Bioetanol para combustibles sino para consumo, motivo por el cual, mal puede estar bajo su autoridad y/o control. Por tal motivo, no tiene de dicha empresa, ninguna documentación ni tiene autorización que otorgar. Concluye, afirmando que, en razón de tal situación, el control debería estar a cargo de las autoridades municipales y/o provinciales, pero no, claramente por su actividad, de la Secretaría de Energía de la Nación.

Ante tan clara, concreta y seria manifestación, la actora expresa que tales son afirmaciones dogmáticas, pues la representante de la Secretaría de Energía no ha aportado ninguna prueba de ello; es decir, de que en la planta de Porta Hnos. S.A. no se fabrique Bioetanol para combustibles.

3.5.3. Aquí radica el principal error de la accionante. Pretende que se invierta la carga de la prueba. Grave confusión a la cual intenta llevar a V.S. Quien debe probar, en su caso, que Porta Hnos. fabrica Bioetanol para combustibles, y los mezcla y/o fracciona y/o vende y/o comercializa, debe ser la actora. No las demandadas. En el expediente no existe la más mínima muestra y/o indicio de que Porta Hnos. S.A. realice dicha actividad. Y quien debiera ser la encargada de probarlo, es la parte que realiza tal afirmación. Ergo, si la actora nada hizo al respecto -o no pudo demostrarlo-, mal puede pedir que lo hagan sus contrapartes procesales.

3.5.4. De lo contrario se entra en la encerrona de la prueba negativa, que es imposible de demostrar, dado que es exigirle a quien no cometió una infracción, un hecho o un delito, que demuestre que no lo hizo. Muy por el contrario, el principio que prima en nuestro ordenamiento procesal -al menos, por ahora- es que, quien alega o aquél que afirma, es quién debe probar. De allí el primer error de los accionantes.

3.5.5. Seguidamente, la representante del Estado Nacional expresa que el presente no es una acción de protección y/o reclamo de daños ambientales, sino un amparo tendiente a averiguar si Porta Hnos. S.A., tiene las habilitaciones correspondientes. Agrega que de ser una acción de daños, V.S. sería incompetente, toda vez que ello estaría reservado a la justicia provincial. A dicha afirmación, los accionantes le responden con que la Secretaría de Energía ha omitido el control sobre Porta Hnos. S.A. sosteniendo que es obligación controlar todos los emisores de

bioetanol y que la Cámara Federal ya se ha expedido sobre la cuestión. En lo que no reparan los accionantes es que la Cámara se ha expedido, pero en función del objeto de la acción de amparo; y no, en mérito del contenido actual que se le está dando, que no forma parte del objeto del amparo.

3.5.6. Nuevamente, los accionantes intentan enredar lo que es clarísimo. Porta Hnos. S.A. no produce bioetanol para combustibles. Si así lo fuera, efectivamente debería estar controlada por la Secretaría de Energía. Pero no es el caso, porque además de los deberes de inscripción y aprobación correspondientes, Porta Hnos. S.A., quedaría fácilmente al descubierto. En efecto: todas las productoras, mezcladoras y distribuidoras de combustibles tienen la obligación de denunciar, en el caso de que distribuyan biocombustibles, quienes son sus proveedores, y los porcentajes de las mezclas. De tal modo, la Secretaría de Energía, en caso de que Porta Hnos. S.A. produjera en su planta de la Ciudad de Córdoba bioetanol para combustibles, tal situación sería fácilmente detectable.

3.5.7. De tal modo, si Porta Hnos. S.A. fuera proveedor de biocombustibles, ya hubiera tomado la cuestión estado público, sencillamente por la obligación de denuncia que pesa sobre las distribuidoras de combustibles. Como vemos, los amparistas incurren en un nuevo error.

3.5.8. No modifica lo expuesto el hecho de las publicaciones que la parte actora prolijamente transcribe en el libelo el cuestionamiento (me refiero a la asociación con Alfa Laval). En efecto, esta parte reconoce la publicación y la asociación más, en modo alguno se desprende que la producción de bioetanol sea para producir combustibles. Hemos dicho y sostenido hasta el cansancio que Porta Hnos. S.A. fabrica bioetanol pero para los productos que fabrica, que son todos destinados al consumo humano. Entonces, dicha cuestión en nada modifica la posición de mi

representada quien, adicionalmente, es, precisamente, quien ha hecho el referido anuncio.

3.5.9. Es que el bioetanol no deja de ser un derivado de especies vegetales, una especie de alcohol más y, por lo tanto, no nocivo para la salud, en la medida en que se lo consuma moderadamente. El hecho de que para evitar que se agoten los recursos no renovables (como los derivados del petróleo), se adicione bioetanol a los combustibles minerales en pequeñas cantidades (no más del 15%), no lo convierten “per se” en dañinos. Es lo mismo que se agregara agua al combustible para “estirarlo” (como habrá hecho alguna vez, algún trasnochado titular de estación de servicio). Y entonces cabe preguntarse: Por esa circunstancia el agua, es también dañina o tóxica?. Claramente no.

3.5.10. No menor es el error en que incurre la parte actora al citar el art. 32 de la Ley General del Ambiente N° 25.675, cuyo segundo párrafo ha sido vetado por el Poder ejecutivo Nacional. Nos remitimos, para no ser reiterativos, a lo expresado en ocasión de cuestionar, al igual que el Estado Nacional, la transformación de la audiencia citada en los términos del art. 36 de Código Procesal, en una audiencia pública e informativa. Reiteramos para que no queden dudas: La norma no está vigente.

3.5.11. Finalmente, y para tratar de justificar su posición, la actora cita alguna doctrina aislada que habla del deber de colaboración y de nuevas conductas procesales. Más allá de configurar un abanico de buenos deseos y de ser una eventual directriz para el legislador en el futuro, lo cierto es que, hoy por hoy, lo que rige en materia de pruebas es el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, y nada de ello, contrariamente a lo prohijado por la actora, legisla. En consecuencia, más allá de ser un catálogo de propuestas, carecen las mismas de toda fuerza y sustento legal.

3.5.12. Como puede apreciarse del presente, la parte actora incurre en confusiones no menores. Es la intención de esta pieza procesal, ordenar y desenmarañar, ese ramo de confusiones con que la actora pretende engañar a V.S.

3.6. Sobre las manifestaciones de Porta Hnos. S.A.:

3.6.1. En el escrito bajo el rótulo de “CONTESTA TRASLADO”, la parte actora hace lo propio con la presentación efectuada por esta parte. No son muy diferentes los argumentos volcados por la actora en dicha pieza procesal a los analizados precedentemente, por lo cual, vale aquí reiterar en gran parte, las conclusiones expuestas en el numeral 2.5 precedente, las que damos aquí por reproducidas.

3.6.2. Se refiere a otras actividades desarrolladas por Porta Hnos. S.A. referidas a la producción de etanol, pero en plantas que se encuentran a más de 100 kilómetros de la Ciudad de Córdoba, lo cual demuestra que mal pueden ser objeto del presente amparo, donde se cuestionan las actividades industriales desarrolladas en la planta sita en Camino a San Antonio Km. 4,5 de esta Ciudad de Córdoba. En efecto, por más de que una de las actividades de Porta Ingeniería (una de las unidades de Porta Hnos. S.A.) sea la entrega de plantas de bio-etanol para combustibles llave en mano, al ser a considerable distancia de la Ciudad de Córdoba, mal puede ser objeto de esta acción de amparo. De todos modos, estas plantas conocidas como “Minidest” no están destinadas actualmente a la producción de biocombustibles y, en cualquier caso, son y serán explotadas por terceros.

3.6.3. Va de suyo, por lo demás, que la actividad de Porta Ingeniería es absolutamente legal, regulada (y hasta incentivada) por el Poder Ejecutivo Nacional,

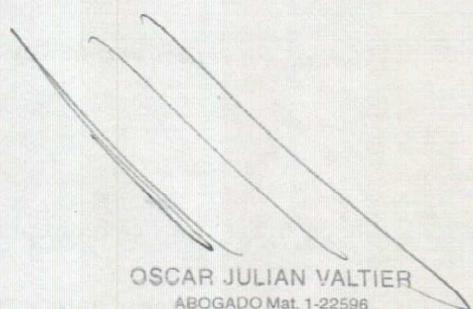
responder tales requerimientos. Ello nos lleva a concluir que lo peticionado por la parte actora resulta improcedente, por lo que se solicita a V.S. rechace lo allí peticionado.

IV. PETITORIO:

Por lo expuesto, a V.S. solicito:

- 4.1.** Tenga presente el mantenimiento de la oposición de esta parte con relación a la desviación del proceso
- 4.2.** Tenga presente las aclaraciones vertidas en el capítulo III de esta presentación.
- 4.3.** Tenga presente la oposición deducida en el numeral 3.7.
- 4.4.** Rechace lo peticionado por la actora.

Proveer de conformidad, **SERA JUSTICIA.**



OSCAR JULIAN VALTIER
ABOGADO Mat. 1-22596
C.S.J.F. - L. 62 Folio 313